

### III. Otras disposiciones

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

**398** REAL DECRETO 2736/1986, de 14 de noviembre, concediendo la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Thoraya Roro.

Visto el expediente incoado a instancia de doña Thoraya Roro, en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil y cumplidos los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de noviembre de 1986,

#### DISPONGO:

Artículo 1.º Se concede la nacionalidad española a doña Thoraya Roro.

Art. 2.º La expresada concesión no producirá efectos hasta que la interesada se inscriba como española en el Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas y caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la notificación sin cumplir estas condiciones.

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,  
FERNANDO LEDESMA BARTRET

**399** ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en recurso número 45/1984, promovido por don Luis Nel-lo Monne y otros tres.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 21 de mayo de 1986 por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso número 45/1984, promovido por don Luis Nel-lo Monne y otros tres, contra la presunta desestimación por esa Dirección General del recurso de alzada contra la Resolución de 14 de junio de 1983, de la Junta Mixta del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles;

Resultando que el citado Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.1, a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos, en parte, el recurso contencioso-administrativo número 45, de 1984, interpuesto por el Procurador señor Lasala, en nombre de don Luis Nel-lo Monne y otros tres contra la desestimación presunta por la Dirección General de los Registros y del Notariado del recurso de alzada interpuesto en su día contra la Resolución de la Junta Mixta del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles a que se contraen estas actuaciones, la que anulamos por ser contraria a derecho, así como la distribución de la participación global que se asigna al personal del Registro disponiendo que se practique otra en que se respete el límite del 20 por 100 del porcentaje respecto al que tenían asignado con anterioridad, y sin condena en costas.»

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Madrid, 23 de diciembre de 1986.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

**400**

ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso número 1.846/1984, interpuesto por don Arturo Moreno Milla.

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 1.846/1984, de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, promovido por don Arturo Moreno Milla, contra la desestimación tácita por silencio administrativo de la petición formulada por el recurrente ante el Ministerio de Justicia, en solicitud del abono del importe de ocho días de haberes descontados del mes de octubre de 1979, en virtud de que por sentencia de 5 de noviembre de 1982, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se anulaba la Orden del Ministerio de Justicia, de 25 de octubre de 1979, relativa a la mencionada retención de haberes; la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, ha dictado sentencia, de 19 de abril de 1986, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Arturo Moreno Milla, contra la desestimación tácita por silencio administrativo de la petición formulada ante el Ministerio de Justicia, a que se contrae este litigio, la anulamos y dejamos sin efecto, acordando la devolución de la cantidad de 20.776 pesetas que le fueron retenidas; sin especial declaración sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.  
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario,  
Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

#### MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

**401**

ORDEN de 27 de noviembre de 1986 por la que se acuerda la ejecución en sus propios términos, de la sentencia dictada en 4 de julio de 1986, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 568 de 1983, interpuesto por don Eugenio y don Juan Sánchez Díaz, de Ubeda (Jaén).

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 4 de julio de 1986, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 568 de 1983, interpuesto por don Eugenio y don Juan Sánchez Díaz, de Ubeda (Jaén), contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 19 de julio de 1983, sobre Contribución Territorial Rústica y Pecuaria -Cuota Proporcional;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Eugenio y

don Juan Sánchez Díaz, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Jaén, de fecha 30 de noviembre de 1982 (reclamación número 71/1980), cuyo acto administrativo se mantiene subsistente por ser ajustado a derecho. Sin expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de noviembre de 1986.-P. D., el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

**402** *ORDEN de 1 de diciembre de 1986 por la que se acuerda la ejecución en sus propios términos, de la sentencia dictada el 20 de mayo de 1986, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 306.986/1983, interpuesto por la Asociación de Comerciantes de Sagunto.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 20 de mayo de 1986 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, estimando el recurso contencioso-administrativo número 306.986/1983, interpuesto por la Asociación de Comerciantes de Sagunto, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 1982, sobre autorización al Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) para que establezca el Impuesto Municipal sobre la Radicación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia de 20 de mayo de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Primero.-Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Comerciantes de Sagunto.

Segundo.-Declara contrario al ordenamiento jurídico el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de marzo de 1982, que autorizó el Ayuntamiento de Sagunto, la implantación del Impuesto Municipal de Radicación en aquel término municipal, así como el Acuerdo de aquel Ayuntamiento que acordó tal implantación.

Tercero.-No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

**403** *ORDEN de 3 de diciembre de 1986 por la que se conceden a las Empresas que al final se citan los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio.*

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 15 de octubre de 1986, por la que quedan aceptadas las solicitudes de inclusión en la zona de urgente reindustrialización de la Bahía de Cádiz, de las Empresas que al final se relacionan, al amparo del Real Decreto 189/1985, de 16 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero). Todo ello de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5 de septiembre de 1986;

Resultando que, los expedientes que se tramitan a efectos de concesión de beneficios fiscales se han iniciado en la fecha que figura en el apartado 6.º de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se regían por la Ley 27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 189/1985, de 16 de enero, que crea la zona de urgente reindustrialización de la Bahía de Cádiz;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de beneficios, España ha accedido a las Comunidades Económicas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales solicitados, y que, por otra parte la Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha de 1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores;

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley

50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 21), Real Decreto 189/1985, de 16 de enero y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, la disposición transitoria tercera de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar a dicha Ley, en un plazo de seis meses, el régimen de las Zonas de Urgente Reindustrialización previstas en la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, manteniendo, en todo caso, los beneficios contenidos en la citada disposición durante el plazo establecido en el artículo 29 de la misma;

Considerando que, de acuerdo con la doctrina y práctica administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a la tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión, que ha de surtir efectos sobre hechos impositivos futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 28, 33 y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud de lo establecido en el artículo 5.º del Real Decreto 189/1985, de 16 de enero; Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Ley 30/1985, de 2 de agosto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma y en el Real Decreto 189/1985, de 16 de enero, que crea la Zona de Urgente Reindustrialización de la Bahía de Cádiz, se otorgan los siguientes beneficios fiscales a la Empresas que al final se relacionan:

A) Bonificación de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las Corporaciones Locales que graven el establecimiento de las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 187.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 22), texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

B) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente reindustrialización podrán solicitar, en cualquier momento, y sin perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes de amortización a que se refieren los artículos 19, segundo d), de la Ley 44/1978, y 13 f), 2, de la Ley 61/1978 adaptados, tanto a las circunstancias que concurren en los elementos objeto del plan como a las circunstancias específicas de su utilización en dicha zona.

C) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se conceden por un período de cinco años, a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo 93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento de la actividad industrial, a que se refiere el apartado A), fuera anterior a la publicación de la presente Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a la zona de urgente reindustrialización, con los que pudieran concederse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un Real Decreto de reconversión industrial, así como con los que pudieran aplicarse por la realización de inversiones en una zona o polígono de preferente localización industrial, o en una gran área de expansión industrial.

Cuarto.-El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales, o en relación con las comprobaciones, a que se refiere el artículo 33 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá dar lugar a la privación total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a los fondos públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y cuotas de los impuestos no satisfechos, así como los correspondientes intereses de demora.

El incumplimiento de las obligaciones a que se haya comprometido las Empresas en los planes y programas de reindustrialización dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios obtenidos, con la obligación de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente, y a una multa del tanto al triple de la cuantía de dichos beneficios, en función de la gravedad del incumplimiento, y sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores de la Empresa por los daños ocasionados al Estado.